



Sacar el dinero para la seguridad de quienes más tienen y deben al gobierno

El pueblo quiere que termine la delincuencia. Pero para ello, el gobierno necesita dinero, pues el plan de acciones preventivas, coercitivas y de rehabilitación es caro. Pero los millonarios que controlan el partido ARENA, la ANEP y la Sala de lo Constitucional hacen todo lo posible para que el gobierno no consiga recursos.

Sobre la delincuencia



El crimen y las extorsiones son herencia de los gobiernos de ARENA. Para combatir esos delitos que afectan a

la población y hacer acciones de prevención para disminuirlos, el Consejo de Seguridad, donde participan importantes sectores de la vida nacional, diseñó un plan que requiere 2 mil 200 millones de dólares.

Pero hay otra delincuencia igual de mala y que le dificulta al gobierno obtener recursos para la seguridad y organizar la prevención. Es la que practican los grandes empresarios que evaden impuestos por más de mil millones de dólares al año y al mismo tiempo le deben al gobierno cientos de millones. Y cada vez hay más indicios de que algunos evasores de impuestos también financian el crimen.

Si el gobierno controlara la evasión de impuestos y lograra cobrar la deuda de los grandes empresarios, obtuviera el 80 por ciento del dinero que necesita para aplicar el plan de seguridad. Entre las empresas deudoras están Droguería Santa Lucía (de Cristiani), AutoFácil (de los Poma), Telecorporación Salvadoreña (de los Eserski) y otras empresas muy grandes.



Propuestas para enfrentar la evasión y la falta de recursos

Para combatir la evasión, la Asamblea Legislativa aprobó, sin los votos de ARENA, un impuesto del 1 por ciento a las ventas o los activos de las grandes empresas que declaran pérdidas casi todos los años y siguen operando. También aprobó un decreto que les perdonaba los intereses y las multas a las empresas que pagaran sus deudas antes de tres meses. Pero esas medidas fueron anuladas por los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional enemigos del gobierno.

Ante ese bloqueo de los recursos por parte de los magistrados, la Asamblea Legislativa aprobó, también sin los votos de ARENA, un endeudamiento por 900 millones de dólares para invertir más en seguridad y en los programas sociales. Pero los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional obligaron al gobierno a parar la operación hasta que ellos decidan si fue legal lo que hizo la Asamblea. Los magistrados le dan largas a su decisión para que el gobierno no consiga dinero.

Hace una semana, el gobierno planteó ante la Asamblea Legislativa una nueva propuesta de obtención de recursos para la seguridad. Se trata de una contribución o cobro del 10 por ciento a los servicios de telefonía. La mayoría de la población rechazó el tributo porque se le carga al consumo. El gobierno dijo que está abierto a escuchar otras propuestas.

Para financiar la seguridad y otros programas, se debe trabajar una reforma fiscal que incluya impuestos a las mansiones de gente rica, a sus ranchos de playa y a los bienes de lujo que consumen, así como impuestos a los capitales que los oligarcas invierten en el exterior. Quien tenga más, que pague más, y si no paga, ¡a la cárcel!